

Venezuela. El paro cívico del 10 de diciembre

Margarita López Maya

Como consecuencia del último paro cívico, se está produciendo un endurecimiento de las posiciones del Gobierno y un debilitamiento de su piso político. Las tendencias indican que 2002 traerá un mayor deterioro de las instituciones democráticas.

El lunes 10 de diciembre de 2001 Caracas amaneció en silencio. Las calles desiertas, un tráfico automotor escaso, colegios y universidades sin clases, comercios y bancos cerrados. No hubo prensa, tampoco restaurantes abiertos. En algunas zonas del oeste de la ciudad, donde se asientan amplios sectores populares, hubo cierta actividad, pues abrieron tiendas de ropa y comida, pero la afluencia de la gente fue escasa. Lo mismo sucedió en Petare, otra área de barrios populares al este, donde los vendedores ambulantes abrieron sus quioscos para una gente que poco se animó a salir. Acompañando al paro,

sobre todo en sectores residenciales de la clase media y alta se escucharon cacerolazos cuando el presidente Hugo Chávez hablaba por televisión. La televisión y la radio corroboraron una situación similar en todas las urbes del país.

Tenía lugar un paro cívico nacional convocado por la Federación de Cámaras de la Industria y el Comercio (Fedecámaras), máxima organización empresarial del país, como protesta contra la forma de aprobación y los contenidos de un paquete de 49 leyes sancionadas en noviembre por el Ejecutivo, paquete que fue aprobado a través de

Margarita López Maya: profesora investigadora del Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela, Caracas; directora de la *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*.

Palabras clave: situación política, Venezuela.

facultades extraordinarias otorgadas por la Asamblea Nacional. Fedecámaras argumentó que las leyes no habían sido suficientemente consultadas con la sociedad y lesionaban derechos constitucionales como el de participación, propiedad, justicia, libertad, derechos humanos y pluralismo político. Entre las normas más criticadas por los empresarios estaban las leyes de Tierras, de Hidrocarburos y de Pesca. La organización logró el apoyo de un importante número de organizaciones de la sociedad civil insatisfechas con las políticas gubernamentales. Al final del día, Fedecámaras calculó que cerca de 90% de la actividad de sus afiliados se había parado. Aunque la información sobre el paro provenía en general de actores interesados, y la prensa y los medios audiovisuales de comunicación estaban respaldando la acción, las imágenes y noticias a través de diversos medios no dejaban lugar para dudas: el paro había sido exitoso.

¿Por qué?

Este éxito hubiese sido difícil de pronosticar un par de meses antes. Sin embargo, tensiones sociales y políticas, junto con errores del Gobierno en el manejo de las mismas, aprovechados por la federación empresarial, poducirían este resultado. Los hechos que llevarían al paro comenzaron en

septiembre con la entrega gubernamental de tierras a familias campesinas, lo que despertó un conflicto virulento. Organizaciones de productores alegaron que muchas de esas tierras eran privadas y productivas. Lo cierto es que en numerosos casos son del Estado, aunque han estado en manos de particulares desde hace décadas. La tensión fue creciendo por la inminente aprobación de la nueva ley de Tierras. A inicios de noviembre se sumaron a este conflicto sectores de la pesca industrial adversos a la ley de Pesca, y personalidades opuestas a la nueva ley de Hidrocarburos. En este último caso, la Cámara Venezolana del Petróleo expresó su acuerdo con los contenidos fundamentales, pero articulistas de prensa y formadores de opinión argumentaron que la nueva norma ahuyentaría la necesaria inversión extranjera en el sector. Voceros de Pdvs, la petrolera estatal, también expresaron desacuerdos.

A estas críticas se sumaron las de diversos sectores educativos en torno de los contenidos del proyecto de ley de Educación que se discutía en la Asamblea. Otras protestas provenían de organizaciones políticas de la oposición, como los casos de marchas convocadas por Acción Democrática o por la Asociación Civil Fuerza Solidaria. Las protestas opositoras terminaron de manera violenta al ser

confrontadas por grupos de simpatizantes del presidente y su partido el Movimiento Quinta República (MVR). Otro foco de conflictividad se desarrollaba en el mundo sindical, luego de las elecciones directas celebradas en sindicatos, federaciones y en la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV). Estas elecciones estuvieron tan plagadas de conflictos, irregularidades e ilícitos, que hasta la fecha no ha sido posible conocer los resultados electorales de la CTV, ni de algunas de las federaciones y sindicatos claves del país.

En estos meses el Gobierno se mostró contradictorio, en ocasiones con señales de receptividad, pero más frecuentemente cerrado al diálogo. Pese a contar con una holgada mayoría en la Asamblea, y aunque muchas de las leyes, si bien contrarias a intereses poderosos, también favorecían a otros, el Gobierno cometió errores políticos importantes. Por ejemplo, el uso de una ley habilitante para sancionar leyes orgánicas esenciales al proyecto político gubernamental. Esto debilitó la difusión y el debate a fondo que ameritaban dichas normas y que hubiese podido desarrollarse en el seno de la Asamblea, lo que restó necesarios apoyos sociopolíticos para enfrentar poderosos intereses. Fue también un error desatender los mecanismos de consulta y búsqueda de consenso

para leyes de menor conflictividad, ello produjo que algunas tuvieran errores y omisiones que hubiesen podido evitarse sin llegar al conflicto.

Otros yerros políticos fueron las confrontaciones del presidente y del MVR con aliados como Alfredo Peña, alcalde mayor de Caracas, o con el MAS (Movimiento al Socialismo), en momentos en que necesitaba consolidar su hegemonía. En las elecciones sindicales, donde el sector oficialista pareció salir derrotado, también se trazó una estrategia equivocada al buscar el predominio sin construir alianzas, en un campo donde el MVR carece de experiencia y cuadros calificados. A estos errores habría que añadir declaraciones de distintos miembros del Gobierno luego del atentado terrorista del 11 de septiembre, que produjeron roces innecesarios con Estados Unidos y descontento en sectores de la opinión pública y de las Fuerzas Armadas.

La situación posterior

Las reacciones al paro han mostrado una actitud intolerante por parte del oficialismo. Esta intolerancia se expresa en la continua descalificación y amenazas verbales contra los sectores opositores, en la renuencia al diálogo y en el amedrentamiento a través de la fuerza militar. El oficialismo ha profundizado estas actitudes en

medio, sin embargo, de marcadas contradicciones internas que parecen resolverse a favor de los sectores duros. Un ejemplo son las acciones emprendidas por el MVR contra los parlamentarios que han propiciado el diálogo con la oposición. Se remitieron sus expedientes al órgano disciplinario partidario y según sea el caso han sido destituidos de sus cargos dentro de la Asamblea. Este endurecimiento tiene su contraparte en Fedecámaras y la oposición en general, que en una actitud intransigente también, y desde una posición fortalecida por el éxito del paro, exigen la derogación de las 49 leyes. Los mecanismos de diálogo están cerrados y el conflicto parece aproximarse a un callejón sin salida. Como último recurso, hay sectores sociales organizados que han introducido demandas de inconstitucionalidad ante el Tribunal Supremo de Justicia.

Las tendencias

El gobierno de Chávez ha visto reducirse las fuerzas sociales y políticas que lo apoyaban; su gestión y su propio partido también han venido perdiendo popularidad y credibilidad. Se pone de manifiesto, igualmente, una complicada lucha interna en el MVR: para 2002 se prevé una depuración interna que consolidará la intransigencia y reducirá la militancia en términos numéricos. Para compensar el

posible debilitamiento del MVR, el Gobierno proyecta el fortalecimiento del llamado Movimiento Bolivariano 200 (MBR-200). Ya en abril de 2001, agobiado por las continuas rencillas internas, Chávez había anunciado la resurrección de esta organización matriz del proyecto bolivariano. Los «círculos bolivarianos», que constituyen su base, son grupos de 10 o 12 personas que, según funcionarios oficialistas, se organizan para luchar por «sus derechos» sociales o comunitarios, y como son organizaciones sociales y no políticas, los militares podrán formar sus círculos y registrarse ante la Secretaría de la Presidencia. Todo parece apuntar hacia la construcción de una red clientelar que ha de vincularse directamente con el presidente Chávez.

Así, se han exacerbado los conflictos y tienden a estrecharse las posibilidades de una salida institucional. De hecho, desde hace meses corren en la capital toda suerte de rumores sobre tensiones en las Fuerzas Armadas. Sin duda una porción de la oposición civil más radicalizada y antidemocrática juega al golpe de Estado, tanto desde territorio venezolano como desde el exterior, pero también la pérdida de piso político en instancias como la Asamblea pudiera tentar a Chávez a una salida de fuerza. Declaraciones de parlamentarios «duros», fortalecidos en esta coyuntura, apuntan en esa dirección. La salida

autoritaria de cualquiera de los dos bandos será una gran pérdida para los venezolanos, pero en especial para los sectores populares. El fracaso del proyecto bolivariano, tanto en su dimensión socioeconómica como en su compromiso con la institucionalidad democrática, infligiría sin duda una derrota a las resistencias al neoliberalismo en América Latina difícil de sobreestimar.

Una salida institucional aún es viable, aunque se presenta especialmente difícil. Parte de la oposición institucional ha estado propugnando la renuncia inmediata del presidente. Si bien es una propuesta legítima, carece de realismo. Otra propuesta, que también se maneja desde esta oposición, es organizarse para impulsar en el mediano plazo un referendo revocatorio. También parece poco realista aunque no enteramente imposible. Chávez y el MVR cuentan aún con importantes recursos para mantenerse dentro de la institucionalidad democrática que

ellos mismos crearon en 1999 y que ahora parecen dispuestos a desechar. El Gobierno cuenta con importantes bases políticas entre los sectores populares, y amplios espacios para la maniobra si decide deponer su intransigencia y avenirse a la lucha hegemónica. Una salida institucional, democrática, implica hoy para Chávez y el MVR, rectificar. Esto significa jerarquizar en la lucha política lo esencial de lo superfluo, así como habilidad política para imponerlo. Y sobre todo, fortalecer las instituciones democráticas en la sociedad y el Estado que puedan servirle como sustento. Perseverar en la actual actitud seguirá debilitando su piso político, deteriorando las instituciones democráticas y haciendo cada vez más lejana la posibilidad de desarrollar en Venezuela un proyecto de naturaleza alternativo y popular.

Caracas, enero de 2002